



El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el entonces presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, en la presentación del proyecto del ATC.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) amenaza con convertirse en un polvorín. Dudas sobre la idoneidad del terreno elegido, riesgo de sobrecostes de hasta un 30%, cinco permisos aún por recibir, y la polémica sobre las prisas con las que el recién sustituido presidente de Enresa habría tratado de licitar contratos. Ahora, el Ministerio de Industria ha paralizado la mayor de las licitacio-

nes, 263 millones para las obras principales, hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear entregue los informes para conseguir la autorización previa, algo para lo que no hay plazo, aunque fuentes del sector estiman que podría ser antes de junio. Se esfuma el deseo de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de cortar la cinta antes de las elecciones.

Dudas sobre los terrenos, falta de permisos, posibles sobrecostes y prisas de última hora en las licitaciones

El cementerio nuclear, un polvorín

■ Nuria Díaz

El proyecto de construcción un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos de alta intensidad llevaba diez años de idas y venidas, y de repente, en los últimos seis meses —justo antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo— estaba embalado. Tanto, que esa parece ser precisamente la causa del cese del hasta hace unos días presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, y sus sustitución por Juan José Zaballa en un golpe de mano de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apoyada por el ministro de Industria, José Manuel Soria. Fuentes del sector señalan que la vicepresidenta nunca vio con buenos ojos el nombramiento de Gil-Ortega, un hombre próximo a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Un pulso que ganó en esa ocasión, Cospedal. Su candidato fue nombrado presidente de Enresa en junio de 2012. Su curriculum: alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, pero sin experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación.

Las presiones políticas han sobrevolado siempre este proyecto. Son muchos los que opinan que Cospedal quería inaugurar el comienzo de las obras antes de las próximas elecciones y también muchos los que han criticado la insistencia de Gil-Ortega en acelerar la adjudicación de las obras de un proyecto al que le faltaba superar el trámite de importantes permisos administrativos. El abrupto cambio en la presidencia del organismo encargado de gestionar todo el proyecto del almacén, ha puesto de manifiesto la cantidad de cabos sueltos que arrastra.

El primero, las dudas sobre la idoneidad del enclave elegido: Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. El Colegio Oficial de Geólogos reprochaba ya el pasado mes de diciembre la ausencia de la geología como factor fundamental en la selección del emplazamiento del ATC. El ICOG señalaba que los estudios geológicos preliminares habían sido "muy insuficientes e inadecuados" siguiendo criterios "fundamentalmente políticos".

Pendientes del CSN

De hecho, un informe posterior encargado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a una consultora medioambiental americana, URS, alertaba de "los graves problemas que surgirán en el futuro en las estructuras de cimentación de las instalaciones, si no se valoraba adecuadamente la información geológica". El presidente del Colegio de Geólogos, Luis Suarez, explica a El Nuevo Lunes que "los terrenos

elegidos son de los denominados inestables, son suelos con carstificación y disolución de yesos, arcillas expansivas y zonas inundables". "No es que no se pueda construir ahí, se puede construir, pero es muy probable que cueste más y se acabe incurriendo en importantes sobrecostes que podrían alcanzar incluso el 50%. En ese sentido, el Colegio denuncia que los reformados de los proyectos fueron una "práctica demasiado habitual" en España durante las últimas décadas y "muy criticada" por los orga-

El Colegio de Geólogos señala que los estudios geológicos preliminares fueron "muy insuficientes e inadecuados" siguiendo criterios "fundamentalmente políticos"

nismos de la Unión Europea. "Múltiples obras de infraestructura se han adjudicado sin los adecuados estudios geológicos previos, lo cual ha generado sobrecostes de más del 30% sobre el presupuesto inicial", finaliza el Colegio de Geólogos. El ICOG cree que debería realizarse un análisis del coste/beneficio sobre la ejecución del proyecto en Villar de Cañas o "alternativamente investigar otras opciones más favorables desde el punto de vista geológico", explica el Colegio. Además de las dudas sobre los

Dos consorcios parecían contar con más opciones para hacerse con el paralizado contrato de las obras del almacén y en los dos estaba ACS, la compañía que preside Florentino Pérez

Diez años de gestiones, uno de concursos

■ El ATC es la construcción donde se albergarán, al menos durante 60 años, los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales. En ese plazo, se deberá encontrar una solución definitiva para alojar estos residuos hasta que pierdan definitivamente la radiactividad que emiten hasta llegar a los niveles normales de la naturaleza.

El proyecto fue acordado en 2004 por unanimidad en el Parlamento. En 2009, el Ministerio de Industria abrió el plazo para que se presentaran municipios voluntarios a acoger el ATC. De entre los 12 candidatos, 8 fueron calificados como idóneos pero el Gobierno no eligió entre ellos hasta el último Consejo de Ministros de 2011. El lugar elegido fue Villar

de Cañas (Cuenca) y, en principio, el objetivo era que el proyecto estuviera concluido a finales de 2017. España tiene un almacén para residuos de baja y media intensidad en El Cabril (Córdoba), y también piscinas en las centrales nucleares. El problema es que no hay un almacén para los residuos de alta intensidad. Por eso, el combustible gastado de las centrales

nucleares españolas están en almacenes franceses gracias a una especie de contrato de alquiler. Los residuos de Vandellós I, según el contrato firmado con Areva, deberían retornar en octubre de este año. La penalización si no se cumplen los plazos es millonaria. Enresa paga a Areva una fianza de 65.000 euros diarios, cantidad no será devuelta si no se cumplen los plazos.

terrenos, son también muchas las voces, ecologistas y oposición a la cabeza, que se han mostrado sorprendidos por que se hubiera comenzado a licitar antes de tener los principales permisos. El proyecto de ATC requiere de dos autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de iniciarse, una de emplazamiento, y otra de construcción, que se están tramitando por separado y sin fecha concreta de entrega. La de emplazamiento analiza la calidad e idoneidad de los terrenos y ha provocado que el organismo le haya pedido más información a Enresa, además del encargo del informe anteriormente citado a una consultora internacional. Fuentes del sector estiman que podrían estar listos en el primer semestre. Una vez esté tomada la decisión, que corresponde al Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, los informes respecto a ambas solicitudes de autorización son, igual que en el caso de una central nuclear, vinculantes si la valoración es negativa y preceptivos, si es favorable. Si el CSN dictaminará que son necesarios cambios en el diseño, por ejemplo, habría que introducirlos lo que seguramente provocaría los sobrecostes que critica el Colegio de Geólogos.

Estos permisos son fundamentales para empezar la obra, pero hay otras licencias pendientes. Concretamente, la Declaración de Impacto Medioambiental, la autorización en el ámbito urbanístico, y la licencia municipal.

Obras millonarias

Precisamente por todo esto, es por lo que en el sector sorprendió tanto que Enresa abriera el concurso para adjudicar el millonario contrato principal, la construcción del silo, por 263, 5 millones de euros, el mayor contrato de los licitados en España el año pasado y que despertó el interés de prácticamente todas las constructoras. Hasta 8 grupos presentaron ofertas, aunque dos parecían desde el principio contar con más opciones y en las dos, estaba ACS, la compañía que preside Florentino Pérez. Dragados (ACS)- Ferroviario-Sarrión, y por otro lado FCC- Vías y Construcciones (ACS)- Gismero. El anterior equipo de Gil-Ortega manejaba como plazos la apertura de sobres de las propuestas económicas a principios de pasado mes de enero para durante este primer trimestre poder empezar las obras. Hace unos días, tras la sustitución de Gil-Ortega, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que la intención del Ejecutivo es tener "muy presente" el pronunciamiento del CSN en todo el proceso.

Unos días antes, el ministro de Industria ya había señalado en declaraciones públicas que se entendieron como una desautorización a Gil-Ortega que era "de sentido común esperar a los permisos del CSN, ya que podrían cambiar las características de la obra". Ahora, las compañías están pendientes de que pasa con el concurso paralizado. Enresa ya ha adjudicado en cualquier caso dos contratos. El contrato de la ingeniería principal se lo llevó, por un montante de 17,8 millones de euros, un consorcio formado por la estadounidense Westinghouse, Técnicas Reunidas y Ghesa.

Además, en febrero del año pasado, la unión temporal de empresas (UTE) formada por las filiales de ingeniería de Gas Natural Fenosa e Iberdrola se adjudicaban dos de los contratos de ingeniería del almacén. Este contrato se vió envuelto en cierta polémica por ser consejero de Iberdrola, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aunque Enresa negó toda relación.